

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL**  
Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Exp. 011-2018-00037-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por CEMENTOS ARGOS S.A, frente al auto que decidió declarar impróspera la excepción previa de “Indebida integración del litisconsorcio necesario por pasiva” dentro del proceso ordinario laboral que adelanta LUIS ALFONSO CANO HERRERA contra COLPENSIONES, donde la recurrente fue vinculada oficiosamente por el despacho.

**ANTECEDENTES:**

El demandante radicó el escrito inicial con el propósito que se declare el derecho que le asiste a la pensión especial de vejez por alto riesgo regulada en el Decreto 2090 de 2003 que derogó el 1281 de 1994, con el consecuencial reconocimiento de la mesada 14, los intereses moratorios y la indexación, además de las costas del proceso.

Una vez notificada en debida forma el libelo, Colpensiones se opuso a las pretensiones por no cumplir el actor con los requisitos de ley para hacerse beneficiario de esta pensión de vejez con cotizaciones de alto riesgo, entidad que negó el derecho por Resolución GNR 56449 del 21 de febrero de 2017 precisamente porque si bien contaba con un total de 1.527,43 semanas aportadas al Sistema General de Pensiones, no alcanzaba las 700 semanas con cotización especial que pregonan el artículo 3° del Decreto 2090 de 2003.

Mediante auto del 13 de diciembre de 2021, el Juzgado de conocimiento que lo es el Once Laboral del Circuito de Medellín, procedió con la vinculación oficiosa de Cementos Argos S.A en virtud a la subrogación en los derechos del accionante determinada dentro de la conciliación plasmada en el acta suscrita el 20 de diciembre de 2007 ante el Ministerio del Trabajo, donde se comprometió a realizar los pagos relacionados con sus aportes al Sistema General de seguridad Social en Pensiones (Págs. 894 Archivo001 - Expediente), al paso que se ordenó su notificación, sociedad que al hacerse presente en la causa, se pronunció proponiendo como medio de defensa entre otros, la excepción previa de *“indebida integración de un litisconsorte necesario por pasiva”*, señalando el *“craso error”* en el que incurrió el director del proceso al decidir sobre su llamado al trámite en calidad de demandada, en tanto aduce la confusión en que se incurre frente a los efectos de la subrogación, pues ella ocurre frente a los derechos del demandante y que en gracia de discusión, su intervención debe darse desde el polo activo de la Litis, sin que el pago de unos aportes al Sistema a nombre del actor implique que se de la figura de su parte de litisconsorte necesario y menos por pasiva, por lo que aduce que ni por la naturaleza ni por disposición legal debió vincularse a la sociedad. Agregó que, de sostenerse la decisión, debe llamarse en la misma calidad a Industrial Hullera S.A, Mineros Unidos S.A y Carbones San Fernando (Págs. 4-5 Archivo 002).

En la audiencia del artículo 77 del CPTSS celebrada el 11 de marzo de 2022, el *a quo* en la etapa de resolución de excepciones previas procedió a pronunciarse concluyendo que la excepción no estaba llamada a salir avante, en la medida que consideraba necesaria la intervención de Cementos Argos S.A atendiendo los aportes a los que se obligó a pagar en virtud al acuerdo conciliatorio llevado a cabo el 20 de diciembre de 2007 indispensables para definir el derecho pensional del demandante, aduciendo que es en este proceso en el que se definirá si la sociedad satisfizo o no el pago pactado, o si por el contrario, se trató de uno deficitario. Impuso costas a cargo de quien propuso la excepción, fijando las agencias en derecho en la suma de \$7.000.000.

Cementos Argos S.A se apartó de la decisión, exponiendo una confusión dada de parte del Juez sobre el término de subrogación definido en el acta que es la fuente de obligación a partir de la cual el Juzgado decidió integrarla a la Litis. Aclaró que esa subrogación implicó adquirir la posición del demandante en los eventuales derechos que tuviere ante la Industrial Hullera, pero que en ningún momento le impuso la figura de deudora frente al actor, calidad que recae es en la Industrial Hullera, desprendiéndose del acta de conciliación que Cementos Argos S.A pagó en calidad de un tercero, y si lo que se está discutiendo es el cumplimiento o no de la obligación de los pagos, tuvo que haberse vinculado al verdadero empleador del demandante, anotando que ese ítem no es objeto de las pretensiones de la demanda, y que si se va a realizar el estudio sobre si se pagaron o no los aportes, no es este el proceso para hacerlo porque se trata de una obligación que fue objeto de cosa juzgada, por lo que no le es dable al operador judicial determinar si ese pago se hizo o no de parte de Cementos Argos, porque si el demandante no encontró cubierto ese deber, no es a través de una acción ordinaria laboral que debe determinarse. En razón de ello solicita la revocatoria de la decisión para en su lugar, se decrete la terminación del proceso frente a Cementos Argos S.A, o en su defecto se integre al resto de las personas jurídicas con las que el demandante manifiesta tuvo una relación laboral. Igualmente busca que se revoque la orden de imponer las costas que se fijaron de manera desproporcionada, por aducir un acto de lealtad procesal de su parte con la intención de evitar una sentencia inhibitoria y evitar nulidades futuras, siendo esta la razón de la excepción y no la de dilatar el proceso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

Pues bien, sería del caso dar paso a resolver el recurso de apelación que fue interpuesto por Cementos Argos S.A contra la providencia que decidió declarar no probada la excepción previa formulada por esta sociedad, estando facultada esta Sala de Decisión conforme a lo que dispone el artículo 65-3 del CPT y de la SS, al enlistar dentro de los autos apelables “el que decida sobre excepciones previas”.

No obstante lo anterior, se tiene que no es posible desconocer por esta colegiatura que las excepciones con el carácter de previas son taxativas, lo que quiere decir que el legislador es el que determina los medios defensivos que tienen tal naturaleza, no existiendo otros que los once casos enlistados en el artículo 100 del CGP aplicable en este trámite por la remisión integrada en el artículo 145 del CPT y de la SS, por lo que ni esa naturaleza ni el momento en el cual deben resolverse depende de las partes ni de su operador judicial, pues contrario a ello, son quienes deben ajustarse a lo determinado por la Ley.

No puede olvidarse que tal y como lo ha definido el tratadista Hernán Fabio López Blanco, las excepciones previas no se dirigen contra las pretensiones del demandante, sino que tienen por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante sobre bases que aseguren la ausencia de causales de nulidad, llegando incluso a ponerle fin a la actuación si no se corrigieron las irregularidades procesales advertidas o si éstas no admiten saneamiento, por lo que en ese orden de ideas, no puede un demandado proponer como excepción previa lo que por ley correspondería a una de fondo o de mérito y que el debido proceso indica que debe resolverse al momento de emitir la providencia de fondo, ni su denominación vincula al juez para resolverla bajo esa calidad.

En el asunto, se tiene que de una lectura simple y sencilla de lo consignado en el ya referido artículo 100 del CGP, se permite advertir que la excepción propuesta con base a lo planteado en el literal a) que es el argumento principal del recurso, no se encuadra dentro de las señaladas en la disposición normativa, sin que tenga cabida dentro de la enunciada en el numeral noveno

que reza: “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, pues contrario a pretender la presencia de algún sujeto en virtud de alguna relación jurídico-sustancial que imponga su necesaria intervención para decidir de fondo, procura su desvinculación, circunstancia que obliga a aseverar que tal pedimento se enmarca en una excepción de mérito que por sus características no es susceptible de ser resuelta en esta etapa del trámite, sino que ha de ser definida en la decisión que se adopte por medio de la sentencia. De esta manera, el Juez en lo que a este punto atañe debió abstenerse de resolver la excepción formulada como una previa, pues acorde al fundamento con el cual se desatendió lo pedido, le era plausible advertir no solo que no hacía parte del listado del mentado artículo 100, sino que no estaba dirigida a asegurar que se adelante el proceso sin vicios que lo afecten, y que de no corregirse oportunamente podría entrañar la nulidad de la actuación, sino a enervar cualquier pretensión que recayera sobre la sociedad.

Ahora, la apoderada recurrente incluyó en los argumentos del medio exceptivo un segundo ítem, donde enuncia la necesidad de citar a Industrial Hullera S.A, Mineros Unidos S.A y Carbones San Fernando S.A en el evento de insistirse en su permanencia dentro del proceso, debido a fungir estas como empleadores de la parte demandante según se dijo en el escrito de demanda.

Al respecto, ningún pronunciamiento mereció de parte del *A quo*, quien se limitó a resolver el medio defensivo con base exclusiva al primer ítem, encontrando esta Sala que la negativa de parte de Colpensiones para conceder la prestación especial de vejez obedeció a tener en cuenta únicamente las cotizaciones realizadas con posterioridad al 23 de junio de 1994 por ser esta la fecha desde que surge la obligación de realizar la cotización especial, excluyendo el tiempo laborado en Mineros Unidos S.A por no ser posible determinar la ejecución de actividades de alto riesgo, por lo que dados los motivos que conllevaron a la vinculación de Cementos Argos S.A de donde se desprende el propósito de desentrañar los incumplimientos patronales para analizar el derecho pensional que se pretende, sería viable anotar la procedencia de dar uso a la figura del litisconsorcio necesario que se encuentra prevista en el artículo 61 del CGP para definirse frente a quienes

fungieron como empleadores, la situación jurídica del actor respecto de sus aportes al Sistema como minero de socavón.

No obstante, además de ser planteada la demanda solo frente a Colpensiones sobre quien el actor enmarcó la Litis por endilgarle la responsabilidad de vigilar el valor cotizado acorde a las reales actividades desarrolladas y no serle exigente el hecho que los empleadores no hayan contribuido con los puntos adicionales, debe valorarse que la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ha avalado que aun con la ausencia del pago del porcentaje adicional en la cotización, esa omisión no releva a la entidad de seguridad social demandada del reconocimiento del derecho pensional pretendido teniendo en cuenta tal tiempo, puesto que si está demostrado en el proceso que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, tales aportes son una obligación a cargo del empleador, cuyo incumplimiento no puede perjudicar el derecho irrenunciable que tiene el trabajador a la cobertura de la seguridad social, máxime que por la clase de labor ejercida, implicó para él un sacrificio adicional en desgaste físico y mengua de su salud (Ver SL9013-2017 y SL590-2020), lo que deriva en que la presencia de los dadores del empleo en la actividad de minería ejecutada por el demandante no resulta ser imperativa, por ser posible en este contexto decidir de fondo sin su comparecencia, atendiendo la historia laboral aportada donde se precisan las cotizaciones realizadas por alto riesgo de parte de los empleadores incluido a Mineros Unidos Ltda. (págs.171-184 Archivo 001 - Expediente), las certificaciones laborales expedidas por Industrial Hullera (Pág. 24-25 Archivo 001 - Expediente), y Carbones San Fernando S.A.S (Págs. 27-32 Archivo 001 - Expediente) con las que en conjunto con las demás probanzas arrimadas con la demanda, pretende la activa dar por acreditados en debida forma los requisitos legales y jurisprudenciales para hacerse acreedor de la pensión por vejez que persigue.

Es bajo tales reflexiones que la excepción propuesta en lo que al segundo ítem se refiere no tiene vocación de prosperidad, por lo que la determinación en esta instancia no podrá ser otra que la de CONFIRMAR la decisión objeto de la alzada, pero por las razones que se exponen en esta oportunidad, esto es, porque por un lado, los argumentos esbozados en el ítem a) no se encuadran

en ninguna de las excepciones previas dispuestas por el legislador y por tanto no era del Juez unipersonal resolverla, y por otro, porque atendiendo los pedimentos de la demanda, lo expuesto en el literal b) no da paso a advertir la existencia de alguna relación jurídico-sustancial que deba resolverse en este escenario y que implique la exigencia procesal de la participación de sus intervinientes para darle validez a la sentencia que haya de proferirse.

Sobre las costas procesales impuestas a esta demandada, debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien le fue resuelta una excepción previa propuesta de manera desfavorable conforme lo pregonan el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a las resultas de la decisión, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente a Cementos Argos S.A le fue resuelta desfavorablemente la excepción previa formulada. Ya de disentir sobre el quantum desproporcionado de esta condena por ascender a \$7.000.000, el escenario procesal previsto será el momento en el que el Juzgado de conocimiento liquide de manera concentrada las costas y agencias tomando en cuenta la totalidad de las condenas asignadas en los autos y trámite de las sentencias de las instancias, pudiendo controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que las apruebe (Artículo 366 del CGP).

En esta instancia acorde a lo estipulado en el artículo 365-3 del CGP, las costas procesales estarán a cargo de Cementos Argos S.A, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

#### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto objeto de apelación en tanto declaró no probada la excepción previa de “Indebida integración del litisconsorcio necesario por pasiva”, pero por las razones anotadas en la parte motiva de

esta decisión. Las costas en esta instancia estarán a cargo de Cementos Argos S.A, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la decisión anterior fue notificada por ESTADOS N° 191 fijados el 24 de octubre de 2022 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.